



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO**  
**EN RESTITUCION DE TIERRAS DE POPAYÁN**

Popayán Cauca, doce (12) de Febrero de dos mil quince (2.015).

**Sentencia No. 018**

**OBJETO A DECIDIR**

Dentro del término señalado en el párrafo 2 del artículo 91 de la ley 1448 de 2011, y agotado el trámite que establece el Capítulo III, del Título IV, de la ley en cita, este despacho procede a resolver la ACCIÓN DE RESTITUCION DE TIERRAS adelantada a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - Territorial Cauca (UAEGRTD), en favor de la señora ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ y su núcleo familiar y para con el predio ubicado en la Vereda El Llanito, Corregimiento de Mondomo, Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.

**RECUESTO FACTICO**

El narrar factico presentado en la solicitud de restitución de tierras se puede sintetizar de la siguiente manera:

La señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GÓMEZ**, junto con su compañero permanente HENRY SAMBONI SILVA (fallecido), es la propietaria de un bien inmueble ubicado en la Vereda "El Llanito", corregimiento de Mondomo, del municipio de Santander de Quilichao, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 132-23783 y cédula catastral 1969800040020177000, en virtud de una compraventa realizada al señor JOSÉ MARÍA GRIJALBA ERAZO, protocolizada mediante Escritura Pública N° 1877 del 10 de diciembre de 1992.

En dicha residencia habitaban, junto con su núcleo familiar, que estaba conformado por su compañero permanente HENRY SAMBONÍ SILVA y sus hijos JIMMY SAMBONÍ MOSQUERA y AURA MARÍA SAMBONÍ MOSQUERA de 17 y 10 años de edad respectivamente. Subsistían del cultivo de café y su compañero permanente a oficios relacionados con la carpintería, además de ejercer como presidente de la Junta de Acción Comunal.

Se conoce que desde el año 2000 en la vereda existía presencia diaria de grupos al margen de la ley, especialmente paramilitares, quienes amedrentaban a sus habitantes generaban zozobra en la comunidad e incluso realizaron varios homicidios violentos.

El día 19 de enero del año 2001, cuando el compañero permanente de la solicitante se encontraba en la residencia en compañía del profesor

ARTURO ALARCON MUÑOZ, hicieron presencia personas armadas que se desplazaban en motocicletas y dispararon contra la humanidad de estas dos personas causándoles la muerte inmediata, hecho que fue observado por el hijo de la solicitante quien para la fecha contaba con 17 años de edad, y al ser testigo de tal hecho fue objeto de amenazas de muerte por parte del grupo homicida.

El desplazamiento forzado de la señora ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ junto a su familia, se produjo el día 19 de enero de 2001, por el homicidio de su compañero permanente y por las amenazas de que fue víctima su hijo JIMMY por parte de los paramilitares responsables del delito. Inicialmente se trasladó con su familia a la ciudad de Cali, permaneciendo allí desde el año 2002 hasta el año 2006 y posteriormente regresó a Mondomo, específicamente a la casa de su padre, más no retornó a su predio dado el temor y todas las consecuencias psicológicas que le produjeron los hechos narrados.

El 20 de septiembre de 2013 la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, se acercó a las instalaciones de la UAEGRTD, Territorial Valle y realizó la solicitud de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, radicada bajo el consecutivo 05516612409131217, ID: 120622.

Adelantado el trámite administrativo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4829 de 2011, el 30 de enero de 2014, la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, fue notificada personalmente de la Resolución de Inclusión en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzadamente N° RC 0030 del 21 de enero de 2014, diligencia para la cual se surtió el correspondiente acto comisorio a la Dirección Territorial del Valle del Cauca, en virtud del domicilio actual de la solicitante.

Realizada la consulta a la Tesorería Municipal de Santander de Quilichao figura una deuda por concepto de impuesto predial a diciembre de 2013 por la suma de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 1'135.174.).

### **DE LA SOLICITUD**

La accionante señora ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ, quien actúa a través de una representante judicial de la UAEGRTD, solicitó como pretensiones principales, las que a continuación se relacionan:

### **PRETENSIONES PRINCIPALES.**

**PRIMERO: PROTEGER** el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras, de la señora ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ y su grupo familiar en los términos establecidos en la Ley 1448 de 2011, sobre "un predio rural ubicado en la vereda El Llanito, corregimiento de Mondomo Municipio de Santander de Quilichao — Departamento, del Cauca", identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 132-23783 y número catastral No. 00-04-0002-0177-000, cuenta con una extensión de 194 metros cuadrados, cuyos linderos son: NORTE:

Francisco Javier Martínez Gómez, cédula catastral 00-04-0002-0342-000 ORIENTE: carretera antigua panamericana, SUR: Edilma Rosero Guerrero cédula catastral 00-04-0002-0188- 000 OCCIDENTE: Edith Medina Rivera cédula catastral N°00-04-0002-0317-000.

**SEGUNDO:** Formalizar y restituir en los términos del literal P) del artículo 91 de la ley 1448 de 2011, el pleno derecho de propiedad correspondiente al predio de la señora ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ garantizando la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de la persona reparada.

**TERCERO:** Como medida de reparación integral, restituir a las víctimas relacionadas en esta solicitud, el predio identificado e individualizado en el acápite de hechos de este escrito y a favor de la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ** identificada con la cédula de ciudadanía número. 34.537.991 de Popayán — Cauca.

**CUARTO:** De acuerdo con la pretensión enlistada en el numeral anterior, disponer el trámite a que haya lugar a través del Juez Ordinario correspondiente, bajo los presupuestos legalmente establecidos, de manera prioritaria, teniendo en cuenta la existencia de derechos en cabeza de una víctima del conflicto armado, merecedor de un tratamiento preferencial. Esta solicitud se hace sin perjuicio de los derechos de los herederos determinados o indeterminados que no hayan acudido a la etapa administrativa.

**QUINTO: ORDENAR** a la Oficina de Instrumentos Públicos del Circulo Registral de Santander de Quilichao, inscribir la sentencia en los términos señalados en el literal c) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, II) cancelar todo antecedente registral, gravamen y limitaciones de dominio, título de tenencia, arrendamiento, falsas tradiciones y medidas cautelares registradas con posterioridad al abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales, esto para aquellos casos que lo ameriten.

**SEXTA: ACUMULAR** en este trámite especial todas las solicitudes de restitución que se llegaren a presentar ante la justicia civil especializada en restitución de tierras, sobre el predio identificado en el numeral primero de estas pretensiones, con arreglo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 95 de la ley 1448 de 2011.

**SEPTIMA: ORDENAR** al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, - IGAC — como autoridad catastral para el Departamento del Cauca, la actualización de los registros cartográficos y alfanuméricos, atendiendo la individualización e identificación del predio que establezca la sentencia de restitución de tierras, esto de conformidad a lo dispuesto a lo dispuesto en el literal p del artículo 91 de la ley 1448 de 2011.

**OCTAVA: RECONOCER** el alivio de pasivos por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones, ordenar y advertir a los entes territoriales su aplicación sobre el predio objeto de restitución como medida con efecto reparador y de conformidad con los artículos 121 de la Ley 1448 de 2011 y 139 del Decreto 4800 de 2011.

**NOVENA: ORDENAR** al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, aliviar la cartera reconocida en la sentencia judicial y contraída con Empresas de Servicios Públicos y entidades del sector financiero.

**DÉCIMA: ORDENAR** la suspensión de todos los procesos o actuaciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza que adelanten otras autoridades públicas o notariales, en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de esta acción

**DECIMA PRIMERA** si existiere mérito para ello declarar la nulidad de los actos administrativos que exijan o reconozcan derechos individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jurídicas particulares y concretas, incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieren otorgado sobre el predio solicitado en restitución y formalización de esta solicitud.

#### **PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:**

**PRIMERA:** En el evento de valorarse y demostrarse técnicamente el riesgo inminente por la ubicación geográfica del predio<sup>89</sup>, dar aplicación al Artículo 97 literal "a" de la ley 1448 del 2011, y de no llevar a cabo o de no ser posible la Restitución del predio abandonado, ordenar y hacer efectiva en favor de la solicitante y su núcleo familiar, las compensaciones de que habla el artículo en mención.

**SEGUNDA:** En caso de aplicación de las compensaciones como mecanismo subsidiario a la restitución, ordene la transferencia del bien abandonado cuya restitución es imposible, al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de acuerdo con lo dispuesto por el literal k) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

**TERCERA:** Solicito de manera respetuosa que en la publicación de la admisión de la solicitud de restitución, en atención al literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, sean omitidos los nombres e identificación de los ciudadanos a quienes represento, así como la información de los núcleos familiares y que en su lugar se publique la información relativa a la entidad que me designó para este trámite.

**CUARTA:** Ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a los entes territoriales y a las demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas - SNARIV-, a efectos de integrar a las víctimas restituidas y sus núcleos familiares a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral en el marco del conflicto armado interno.

**QUINTA:** Proferir todas aquellas órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio de los derechos de los solicitantes de restitución , conforme a lo establecido en el literal p) el artículo 91 ibídem.

**SEXTA:** En aras de dar cumplimiento a lo informado en el literal "p" del artículo 91 de la ley 1448 de 2011, sobre contenido del fallo y en especial teniendo en cuenta la facultad de emitir "las órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas;"(negrillas fuera de texto), y teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial ha verificado la existencia de otros requerimientos de la comunidad para garantizar la estabilidad del proceso, comedidamente les solicitamos ordenar en cuanto haya lugar, aplicando un término prudencial a las entidades correspondientes para su cumplimiento, lo siguiente:

a) Ordenar al BANCO AGRARIO de Colombia la priorización de la entrega de los subsidios de vivienda para su mejoramiento, a la persona víctima del desplazamiento y quienes han sido incluidas en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas, y que actúan como solicitantes de la presente acción.

b). Ordenar al Ministerio del Trabajo, a la Unidad de Víctimas y al SENA, la implementación del [se ponga en marcha el] Programa de Empleo Rural y Urbano al que se refiere el Título IV, Capítulo I, Artículo 67 del Decreto 4800 de 2011, dirigido a beneficiar a la población víctima del desplazamiento ocurrido en la Vereda EL LLANITO de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.

f) Ordenar al Ministerio del Trabajo y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, implementar el programa de empleo y emprendimiento Plan de Empleo Rural y Urbano, estipulado en el Título IV, Capítulo I, Artículo 68 del Decreto 4800, dirigido a favorecer a la población víctima del desplazamiento ocurrido en la Vereda EL LLANITO del Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.

g) Ordenar a la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, con el concurso del Departamento del Cauca, el Departamento para la Prosperidad Social y el SENA, la implementación de proyectos productivos sustentables en el predio objeto de la solicitud atendiendo a los usos de suelo de esa zona, con el fin de aumentar la diversificación y producción local de alimentos.

#### **TRÁMITE JUDICIAL DE LA SOLICITUD:**

Mediante interlocutorio datado 17 de marzo de 2014, el despacho resuelve admitir la solicitud de restitución y formalización de tierras incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de restitución de tierras despojadas Territorial Cauca, en representación de la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ** Y su núcleo familiar, quienes actúan a través del Dr. JOSE LUIS SARRIA ESPINOSA designada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de restitución de tierras despojadas Territorial Cauca, y relacionada con el predio rural ubicado en la vereda "EL LLANITO", Corregimiento de Mondomo, Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.

Oportunamente se llevó a cabo la notificación de la decisión a la accionante, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de restitución de tierras despojadas Territorial Cauca, a la Procuraduría, al representante legal del ente territorial, al personero municipal; y se efectuaron las publicaciones de

la admisión de la solicitud y las demás medidas que prescribe el artículo 86 de la ley 1448 de 2011.

En proveído datado 12-06-2014, se da inicio al periodo probatorio, ordenándose la práctica de pruebas, teniendo como tales lo documentos aportados con el libelo, y se decretó la recepción del interrogatorio de los accionante y su núcleo familiar, de igual manera la práctica de una diligencia de Inspección Judicial al bien objeto de restitución.

El 8 de julio de 2014, en audiencia llevada a cabo en el despacho del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, se recibieron los interrogatorios a los solicitantes y su núcleo familiar, finalizada la recepción de esta prueba, el señor Juez recordó a las partes, la realización de la Diligencia de Inspección Judicial, la cual se llevó a cabo al día siguiente 29 de julio del 2014. En el lugar de la diligencia se recibió el testimonio del señor JUAN CARLOS ESPINOSA.

Por auto de fecha 30 de julio de 2014, se resolvió dar por terminado el debate probatorio en este asunto, en virtud de que las pruebas recaudadas se consideran suficientes para la decisión definitiva, y se corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - Territorial Cauca (UAEGRTD), en representación de la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ** y su núcleo familiar, dentro del término concedido para el efecto, presentó sus alegatos de conclusión, y aludió:

**Fundamentos jurídicos:** manifestó que durante el trámite administrativo de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas se logró establecer fehacientemente el cumplimiento de las exigencias contenidas en los art. 3 y 75 de la ley 1448 de 2011 así:

La solicitante y su esposo (fallecido) al momento de los hechos que dan sustento a esta petición, ostentaban la calidad de propietarios del bien objeto de restitución, tal como se desprende del respectivo certificado de tradición.

Recalca que el 19 de enero del 2001, su compañero permanente HENRY SAMBONI SILVA, fue asesinado violentamente en su residencia, hechos que fueron presenciados por su hijo, que también fue amenazado por el grupo ilegal, situación que obviamente la obligó a desplazarse de su lugar de residencia.

Que los hechos ocurridos dentro del marco del conflicto armado en el país y especialmente en el Municipio de Santander de Quilichao Cauca, que han afectado las zonas urbana y rural, sucedieron y se enmarcaron dentro del periodo de tiempo exigido por el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

Realiza un análisis juicioso de la Justicia Transicional y los principios que informan la ley 1448 de 2011, para concluir que los hechos o la situación



que generó el abandono del inmueble por parte de la solicitante **ALBA NIDIA MOSQUERA** y su núcleo familia, se configura como resultado directo de hechos de violencia que se dan en el marco del conflicto armado y hacen parte de una serie de vulneraciones sistemáticas de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional humanitario DIH de que fueron víctimas.

Considera demostrado el cumplimiento de las exigencias de que trata la Ley 1448 de 2011, y atendiendo a los principios de Buena fe y demás garantías del trámite de restitución de tierras, en el evento de existir se debe resolver la duda probatoria en favor de la víctima, se solicita acceder a las pretensiones que se invocan en la solicitud de restitución de tierras.

### **CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

El Ministerio Público emitió su concepto oportunamente, en el que inicialmente efectuó un recuento de los hechos planteados en el libelo, pretensiones principales y subsidiarias, de las consideraciones de situación de violencia en la zona del predio, de los Fundamentos de hecho del predio de la solicitante **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, de la identificación de los titulares, su calidad de víctimas e identificación del predio y fundamentos jurídicos.

Así mismo efectúa un recuento del trámite procesal, de la competencia del despacho.

En cumplimiento de sus funciones refiere que la etapa procesal ha cumplido con las exigencias normativas para ello y la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas, e igualmente refiere que todo el acopio probatorio realizado por la unidad tiene el valor de prueba fidedigna y ellas cumplen los requisitos necesarios para la inscripción del predio en la etapa administrativa y deben ser el derrotero para el fallo a proferir.

Indicó la GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS, que con fundamento en lo ordenado en el artículo 3º del Decreto 2246 de 2011, es obligación del Ministerio Público intervenir en los procesos de restitución de tierras ante los jueces y tribunales pertinentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos que les asiste a las víctimas del conflicto armado.

Que durante las etapas surtidas dentro del proceso sumario no se evidenció por parte de este Ministerio Público, ningún tipo de actuación irregular de los funcionarios vinculados directa e indirectamente al proceso, que puedan afectar los derechos fundamentales de los solicitantes y su núcleo familiar respetándose todas las garantías a los solicitantes.

En el acápite denominado consideraciones del Ministerio Público, realiza un juicioso análisis de los derechos de las víctimas basado en la constitución como también la importancia que se la da en la carta magna al derecho a la Propiedad y la obligación estatal de su protección.

Refirió de la JUSTICIA TRANSICIONAL, al respecto manifestó que logra concebirse como una corporación jurídica a través de la cual se procura formar disímiles esfuerzos, que emplean las colectividades para afrontar las secuelas de violaciones masivas y abusos generalizados o persistentes en materia de derechos humanos, soportados en un conflicto, hacia un periodo provechoso de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, circunstancias de excepción frente a lo que trascendería de la aplicación de las instituciones penales corrientes.

Que se registra como víctimas a aquellas personas que hubieren sufrido un daño; la noción de daño es la más reveladora de todas, pues es de la acreditación de su ocurrencia que depende que las personas interesadas logren ser registradas como tal y accedan a los significativos beneficios instituidos en la ley; que la Ley 1448 de 2011 en su artículo tercero las determina.

Que el concepto de daño es amplio y entendido, pues abarca todos los diferentes fenómenos continuamente admitidos como principio creador de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus distintas formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la subordinación económica que hubiere vivido frente a la persona primariamente afectada, así como todas las demás características de daño, registradas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, actualmente o en el futuro. La noción de daño percibe incluso eventos en los que un explícito sujeto resulta afectado como consecuencia de hechos u acciones que directamente hubieren repetido sobre otras personas, lo que claramente admite que a su abrigo se consienta como víctimas a los familiares de los directamente lastimados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente relevante.

Frente al desplazamiento y el abandono forzado realiza un análisis sobre el flagelo en el que estos fenómenos se han convertido en nuestro territorio y las inmensas afectaciones de toda índole que tales circunstancias generan en las víctimas y en su núcleo familiar.

Que en los últimos años se ha discutido mucho del desplazamiento forzado en Colombia, del aumento de personas que se ven forzadas a renunciar a sus hogares para salvaguardar sus vidas todos los días, de sus miserias y de lo insuficiente de los recursos asignados para atenderlas. Pero aún se posee una yerra apreciación del desconsuelo de quienes son desterrados de sus tierras y del impacto a corto y largo plazo del desplazamiento en su existencia y en las de sus hijos, coexistiendo un entendimiento muy restringido de la forma en que el desplazamiento hace víctimas a quienes lo sufre y en este sentido el estado como un forma de aceptar su corresponsabilidad en esta grave situación a enmarcado en la ley 1448 del 2011 los mecanismos de protección para con las victimas del abandono o desplazamiento forzado.

En cuanto al **CASO EN CONCRETO** adujo:

No hay duda frente a la relación jurídica de la solicitante para con el predio como tampoco en la identificación plena del mismo.



Igualmente los hechos que sirvieron de fundamento en la solicitud, se evidencia la condición de víctima, no solo por el hecho de estar registrada como tal en la Unidad de Víctima, sino que existen pruebas sobre ello, de igual manera se identificó su núcleo familiar y finalmente la solicitud cumple con el requisito de temporalidad exigido por la Ley, ya que el desplazamiento y posterior abandono del predio ocurrió dentro del lapso que establece la ley.

Que en calidad de Ministerio Público, considera salvo mejor criterio, que la solicitud de restitución impetrada por la UEAGRTD en favor de la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, y su núcleo familiar, cumple con todos los requisitos exigidos por la ley 1448, y que acorde a lo conocido en el proceso, el retorno al predio solicitado no se haría en condiciones dignas ni de seguridad por lo cual solicita se le de aplicación a las normas de la ley 1448 del 2011 relacionadas con la compensación por predio equivalente o en ultimas compensación económica.

### **PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER**

¿Resulta procedente declarar en sentencia la protección del derecho a la restitución de tierras, solicitada por la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, en calidad de propietaria del inmueble urbano ubicado en la vereda EL LLANITO, Corregimiento de Mondomo, Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, identificado con Matrícula Inmobiliaria No 132-23783 y cédula catastral 00-04-0002-0177-000, acorde con lo preceptuado por la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes, los postulados de la justicia transicional concebida para la protección y reparación integral a las víctimas, así como las normas constitucionales y el precedente jurisprudencial relativo a esta materia?.

### **TESIS DEL DESPACHO**

El despacho sostendrá la tesis de que **SI** procede la restitución de tierras para la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ** y su núcleo familiar.

### **ARGUMENTOS Y CONSIDERACIONES SOBRE LA TESIS**

#### **COMPETENCIA.**

EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE POPAYÁN es competente para proferir la respectiva sentencia de fondo en única instancia, dentro de la presente solicitud de Restitución y Formalización de Tierras, de conformidad con lo estatuido en el artículo 79 inciso segundo de la Ley 1448 de 2011, norma declarada exequible en sentencia de constitucionalidad 099 del 27 de febrero de 2013.

### **REQUISITOS FORMALES DEL PROCESO.**

Bajo las ritualidades de la ley 1448 de 2011 y con el respeto absoluto de los derechos fundamentales de contradicción y debido proceso se tramitó la presente solicitud en favor de la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, sin encontrarse irregularidad sustancial que nos impida tomar la decisión de fondo que esta solicitud constitucional deprecia.

Necesario es anotar, que posterior a los momentos procesales que trae consigo la ley en cita, no comparecieron al proceso de formalización y restitución de tierras opositores o terceros que intervinieran dentro del término legal.

### **EL ABANDONO PROVOCADO POR LA VIOLENCIA "ESTADO INCONSTITUCIONAL"**

La afectación a civiles dentro de los conflictos armados ha sido un tema de debate internacional y que ha copado el interés de los órganos Colombianos, no solo con la aprobación de tratados y convenciones internacionales, sino también con amplia jurisprudencia y leyes que en cierta forma dan cuenta de la corresponsabilidad estatal que conmina a la obligación de resarcir a las víctimas del conflicto armado interno.

La violencia Colombiana cuyos orígenes históricos se retrotraen a la violencia bipartidista de los años 40 ha dejado en sus enfrentamientos civiles afectados en muchos de sus bienes jurídicos que debieron ser protegidos por el Estado. En cierta forma no solo con la regulación penal vigente, sino también con las nuevas leyes (ley de justicia y paz) ha propendido el Estado por proteger los bienes jurídicos relacionados con la vida e integridad personal de las víctimas, olvidando por un largo lapso otros derechos de rango constitucional que generan una gran afectación personal, familiar y social, como lo es el derecho constitucional a la propiedad privada, y otros derechos conexos frente a las tierras cuyas vulneraciones son evidentes dentro del marco de la violencia Colombiana, generando desplazamientos forzados, despojos materiales y jurídicos, y abandonos de tierras.

Las afectaciones mencionadas que menoscaban la propiedad, posesión o explotación de tierras de civiles en medio del conflicto armado, han tenido un amplio manejo judicial internacional, siendo muchos de ellos (convenios, tratados y principios) parte de nuestro bloque de Constitucionalidad:

A. - Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, y específicamente los siguientes artículos:

" ...Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ...

Artículo 13. Num. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

Artículo 16. Num. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17. Num 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Num. 2. Nadie será privado arbitrariamente de la propiedad.

B.- Todos estos derechos, igualmente se encuentran protegidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, en abril de 1948, en los siguientes artículos: Derecho a la vida I, protección a la familia VI, derecho a fijar residencia y a la libre circulación dentro de su Estado VIII, y derecho a la propiedad privada XXIII. Así mismo, este instrumento consagra los derechos de las mujeres embarazadas, en época de lactancia, y de los niños y las niñas en el artículo VII.

C.- Por su lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XX) de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, y entrada en vigor en Colombia el 23 de marzo de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968; igualmente prescribe la protección de los derechos antes enunciados en sus artículos:

Derecho a la vida 6.1., derecho a la libre circulación y a la escogencia de su lugar de residencia 12.1., 12.3., protección de la familia 23.1., 23.4., derechos de los niños y las niñas 24.1., 24.2., 24.3.

D.- Se consagran igualmente estos derechos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor el 18 de julio de 1978, y entrada en vigor en Colombia, el 18 de julio de 1978, en virtud de la Ley 16 de 1972, artículos: Derecho a la vida 4.1., protección a la familia 17.1., 17.4., 17.5., derechos de los niños y las niñas 19, derecho a la propiedad privada 21.1., 21.2, derecho de circulación y de escoger residencia 22.1., 22.3., 22.4.

E. También cobran una importancia fundamental los Convenios de Ginebra (artículos comunes). Aprobados por la Conferencia Diplomática para elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger las víctimas de la guerra, el 12 de agosto de 1949. Entrados en vigor: 21 de octubre de 1950. Entrados en vigor para Colombia: 8 de mayo de 1962, en virtud de la Ley 5 de 1960. Así mismo, es aplicable el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II). Aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho humanitario aplicable en los conflictos armados, el 8 de junio de 1977. Entró en vigor el 7 de diciembre de 1978. Entrada en vigor para Colombia el 15 de febrero de 1996, en virtud de la Ley 171 de 1994. Este Protocolo II contempla de manera expresa la prohibición de los desplazamientos forzados en su artículo 17.

Adicional a estos instrumentos, existen unos principios específicos, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, y que se conocen como:

A.- Principios Rectores de los Desplazamiento Internos. Los cuales fueron presentados por el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los Desplazados Internos a la Comisión de Derechos Humanos en 1998, en su informe E/CN.4/1998/Add.2 (Principios Deng). En la cartilla de difusión de estos Principios, elaborada conjuntamente por la Defensoría del Pueblo y el ACNUR18, se señala textualmente en su presentación:

" Las disposiciones contenidas en los principios han sido consideradas por la Corte Constitucional como parte del bloque de constitucionalidad y por ende elevadas al rango de la Constitución Política de Colombia, en la medida en que recogen las obligaciones internacionales del Estado establecidas en los distintos tratados que en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Refugiados ha suscrito el Estado colombiano. Por consiguiente. Estos principios tienen que ser aplicados a la situación de las personas desplazadas. --- De conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos se han convertido en un instrumento de gran importancia para precisar, por vía jurisprudencial el alcance de los derechos de que goza la población en situación de desplazamiento así como para establecer los niveles mínimos de satisfacción de los derechos humanos y fundamentales de las víctimas a los cuales está obligado el Estado colombiano. Nuestro tribunal constitucional, en varios de sus fallos. ha utilizado los Principios Rectores como instrumento orientador y de interpretación del alcance de los derechos de la población desplazada. así como de la responsabilidad y de las obligaciones del Estado". (UNHCR/JACNUR y DEFENSORIA DEL PUEBLO. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. (S.L.), Gente Nueva Editorial, (S.F.).Pp. 5-7).

Estos principios buscan la protección de las víctimas frente a vulneración de derechos fundamentales por delitos de lesa humanidad y las obligaciones del estado y de los organismos internacionales no solo para hacer efectiva la garantía de los derechos sino para restablecerlos y tomar medidas que eviten que tan graves hechos vuelvan a suceder, principios que han sido citados y analizados por nuestro máximo organismo judicial en lo Constitucional en varias de sus sentencias, entre ellas tenemos : T-327 del 26 de marzo de 2001, T-268 de 27 de marzo de 2003, y T-025 del 22 de enero de 2004, siendo esta última muy relevante para el restablecimiento de los derechos conculcados a las víctimas, la reparación de los mismos y al restitución de tierras, tema que analizaremos en forma posterior.

B.- Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas. Adoptados por las Naciones Unidas en el año 2005, en su informe número E/CN.4/Sub.2/2005/17 (Principios Pinheiro). En el prólogo de la cartilla difundida por el ACNUR19, se expresó:

" ... Las disposiciones incluidas en los Principios han sido consideradas por la Corte Constitucional como parte del bloque de constitucionalidad en la sentencia T-821/2007 y, por ende, elevadas al rango de la Constitución Política de Colombia. Consideró la Corte que al ser la restitución parte integral del derecho fundamental de las víctimas a obtener reparaciones, la restitución de los "bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho fundamental".

Podríamos concluir realizando un análisis comparativo de estos principios y la ley 1448 de 2011, que su filosofía y el fin perseguido es el mismo cual es hacer efectiva jurídica y materialmente la restitución de la tierra a las víctimas individual o colectivamente consideradas que hayan sufrido despojo, desplazamiento o abandono forzado producto del conflicto armado interno. (UNHCR/ACNUR. Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas (Principios Pinheiro). (S.L.), (S.E.), (S.F.). P. 8 y 9.)

Ahora bien, conociendo los instrumentos y herramientas internacionales podríamos decir que emitida la sentencia T-025 de 2004 y sus actos de seguimiento, se generó la obligación del estado Colombiano de restablecer derechos de las víctimas con mecanismos reales y efectivos de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición, materializándose tal obligación en la expedición de la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, para garantizar el derecho de propiedad, posesión u ocupación de una población que fue alejada de su lugar de origen o residencia, perdiendo sus costumbres, su identidad cultural e incluso su estabilidad económica y familiar.

La ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras hace parte de la denominada Justicia Transicional cuyo concepto ha sido tenido en cuenta por la Corte Constitucional en las Sentencias C-370 de 2006, C-1119 de 2008 (Ley de Justicia y Paz) y C-771 de 2011 (Ley de Verdad Histórica), señalando que se "trata de un sistema o tipo de justicia de características particulares, que aspira a superar una situación de conflicto o postconflicto, haciendo efectivos en el mayor nivel posible, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas frente a un pasado de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, teniendo como límite la medida de lo que resulte conducente al logro y mantenimiento de la paz social".

La Corte Constitucional, en sentencia C-715 del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), Referencia: expediente D-8963, Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, refirió el tema de la condición de víctima y los requisitos para acceder a los beneficios que otorgan a efecto de hacer efectivo sus derechos, y expresó:

"... esta Corporación reitera su jurisprudencia en cuanto a la diferenciación entre la condición de víctima y los requisitos formales y exigencias de trámite para el acceso a los beneficios previstos por las leyes dirigidas a consagrar, reconocer y otorgar beneficios de protección para el goce efectivo de sus derechos. Sobre este tema, esta Corporación ha sostenido que la condición de víctima es un hecho fáctico, que no depende de declaración o de reconocimiento administrativo alguno. En este sentido, ha consolidado una concepción material de la condición de víctima del conflicto armado, entre ellos especialmente del desplazado forzado por la violencia interna, de tal manera que ha precisado que "siempre que frente a una persona determinada, concurren las circunstancias [fácticas] descritas, ésta tiene derecho a recibir especial protección por parte del Estado, y a ser beneficiaria de las políticas públicas diseñadas para atender el problema humanitario que representa el desplazamiento de personas por causa del conflicto armado."<sup>1,2</sup>

El alto Tribunal Constitucional en la sentencia de constitucionalidad referida en precedencia, indicó lo relacionado con los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, encontrando inmerso el derecho a la restitución de tierras:

---

<sup>1</sup> Sentencia T-042 de 2009, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

<sup>2</sup> C-715 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SVP: María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV y AV: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).



**"5.2.1 En cuanto al derecho a la justicia,** la Corte en su jurisprudencia ha establecido diversas reglas, tales como: i) la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de violaciones masivas, continuas y sistemáticas como el desplazamiento forzado interno; (ii) la obligación del estado de luchar contra la impunidad; (iii) la obligación de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia para la protección judicial efectiva de los derechos de las víctimas de delitos. En este sentido, se fija la obligación del Estado de diseñar y garantizar recursos judiciales efectivos para que las personas afectadas puedan ser oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer valer los intereses de las víctimas en el juicio; (iv) el deber de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los responsables de graves violaciones de derechos humanos como el desplazamiento forzado; (v) el respeto del debido proceso y de que las reglas de procedimiento se establezcan con respeto del mismo; (vi) la obligación de establecer plazos razonables para los procesos judiciales, teniendo en cuenta que los términos desproporcionadamente reducidos pueden dar lugar a la denegación del derecho a la justicia de las víctimas y a la no obtención de una justa reparación; (vii) el deber de iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves violaciones contra los derechos humanos; (viii) **el mandato constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos tanto de justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales como amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad;** (ix) el establecimiento de limitantes y restricciones derivadas de los derechos de las víctimas, frente a figuras de seguridad jurídica tales como el non bis in idem y la prescriptibilidad de la acción penal y de las penas, en casos de violaciones protuberantes a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos; (x) la determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal o de disminución de las penas en procesos de transición, en cuanto no es admisible la exoneración de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y por tanto el deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes investigados. Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede tener excepciones en procesos de justicia transicional en los cuales se investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos y se restablezcan los derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral y se diseñen medidas de no repetición destinadas a evitar que los crímenes se repitan; (xi) **la legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para hacerse parte civil dentro de los procesos penales con el fin de obtener la verdad y la reparación del daño;** (xii) la importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; (xiii) la garantía indispensable del derecho a la justicia para que se garantice así mismo el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas.

**5.2.2 En relación con el derecho a la verdad,** la jurisprudencia de la Corte ha establecido los siguientes criterios jurisprudenciales:

(i) El derecho a la verdad, se encuentra consagrado en los principios 1 a 4 de los Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, y encuentra su



fundamento en el principio de dignidad humana, en el deber de memoria histórica y de recordar, y en el derecho al buen nombre y a la imagen; (ii) Así, **las víctimas y los perjudicados por graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho inalienable a saber la verdad de lo ocurrido**; (iii) este derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, y por tanto aparece una dimensión individual y una colectiva; (iv) la dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Este derecho aparece por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la comisión de los hechos criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el delito que se investiga constituye una grave violación a los derechos humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad; (v) la dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una "memoria pública" sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos; (vi) el derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser garantizado en todo tiempo; (vii) con la garantía del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real; (viii) este derecho se encuentra intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a la justicia y a la reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es posible si se proscriben la impunidad y se garantiza, a través de investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas por parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción; (ix) de otra parte, **el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya que el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus familiares, constituye un medio de reparación**; (x) los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a conocer el destino de los desaparecidos y el estado y resultado de las investigaciones oficiales. En este sentido, el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas o secuestradas se encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de la víctima a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho, incluso, si no existen procesos penales en contra de los presuntos responsables (por muerte, indeterminación o cualquier otra causa)<sup>3</sup>; (xi) finalmente, en cuanto al derecho a la verdad, la Corte resalta no solo la importancia y la obligación del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de esclarecer la responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino también la importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad histórica, como comisiones de la verdad de

<sup>3</sup> La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han estimado que las personas que ignoran el paradero de familiares desaparecidos se encuentran en una situación tal de angustia y ansiedad que encuentran violado su derecho a la integridad psíquica y moral y, por tanto, constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Al respecto se puede consultar, entre otras, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Blake, (Sentencia de enero 24 de 1998); Caso Villagrán Morales y otros, (Sentencia de Noviembre 19 de 1991); caso Bámaca Velásquez, (Sentencia de noviembre 8 de 2000).

carácter administrativo, que en casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, deben servir a los fines constitucionales antes mencionados.

**5.2.3** En cuanto al **derecho a la reparación**, la jurisprudencia de la Corte ha fijado los siguientes parámetros y estándares constitucionales, en armonía con el derecho y la jurisprudencia internacional en la materia: (i) el reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que le asiste a las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, y de que por tanto éste es un derecho internacional y constitucional de las víctimas, como en el caso del desplazamiento forzado; (ii) el derecho a la reparación integral y las medidas que este derecho incluyese encuentran regulados por el derecho internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, aspectos que no pueden ser desconocidos y deben ser respetados por los Estados obligados; (iii) **el derecho a la reparación de las víctimas es integral, en la medida en que se deben adoptar distintas medidas determinadas no solo por la justicia distributiva sino también por la justicia restaurativa**, en cuanto se trata de la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas; (iv) **las obligaciones de reparación incluyen, en principio y de manera preferente, la restitución plena (restitutio in integrum), que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación**, entendida ésta como una situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas; (v) de no ser posible tal restablecimiento pleno es procedente la compensación a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado; (vi) la reparación integral incluye además de la restitución y de la compensación, una serie de medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición. Así, **el derecho a la reparación integral supone el derecho a la restitución de los derechos y bienes jurídicos y materiales de los cuales ha sido despojada la víctima; la indemnización de los perjuicios; la rehabilitación por el daño causado; medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; así como medidas de no repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan**; (vii) **la reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tiene tanto una dimensión individual como colectiva**; (viii) en su dimensión individual la reparación incluye medidas tales como la restitución, la indemnización y la readaptación o rehabilitación; (ix) **en su dimensión colectiva la reparación se obtiene también a través de medidas de satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se proyecten a la comunidad**; (x) **una medida importante de reparación integral es el reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de tal actuación**. En efecto, como ya lo ha reconocido la Corte, la víctima tiene derecho a que los actos criminales sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir del reproche público de dichos actos. Por consiguiente, una manera de vulnerar de

nuevo sus derechos, es la actitud dirigida a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o justificar los crímenes cometidos;(xi) **el derecho a la reparación desborda el campo de la reparación económica, e incluye además de las medidas ya mencionadas, el derecho a la verdad y a que se haga justicia.** En este sentido, el derecho a la reparación incluye tanto medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria histórica, como medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y sancione a los responsables. Por tanto, la Corte ha evidenciado el derecho a la reparación como un derecho complejo, en cuanto se encuentra en una relación de conexidad e interdependencia con los derechos a la verdad y a la justicia, de manera que no es posible garantizar la reparación sin verdad y sin justicia; (xii) la reparación integral a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que éstos no pueden confundirse entre sí, en razón a que difieren en su naturaleza, carácter y finalidad. Mientras que los servicios sociales tienen su título en derechos sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar dichos derechos sociales, prestacionales o políticas públicas relativas a derechos de vivienda, educación y salud, y mientras la asistencia humanitaria la ofrece el Estado en caso de desastres; la reparación en cambio, tiene como título la comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño antijurídico y la grave vulneración de los derechos humanos, razón por la cual no se puede sustituirlas o asimilarlas, aunque una misma entidad pública sea responsable de cumplir con esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la reparación; (xiii) la necesaria articulación y complementariedad de las distintas políticas públicas, pese a la clara diferenciación que debe existir entre los servicios sociales del Estado, las acciones de atención humanitaria y las medidas de reparación integral. De esta manera, el Estado debe garantizar todas las medidas, tanto de atención como de reparación a la población desplazada, hasta el restablecimiento total y goce efectivo de sus derechos.”(resaltado agregado al texto) 4

El proceso judicial de Restitución de Tierras se encuentra enmarcado en los parámetros de la justicia transicional, por cuanto contiene unos principios, un marco de aplicación propio y un tratamiento especial de las víctimas de situaciones de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-099 del veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013), Referencia: expediente D-9214, Magistrada sustanciadora: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, habló del proceso de restitución de tierras de que trata la ley 1448 de 2011, e indicó:

“ ... De conformidad con lo que establece el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011, las acciones de restitución a los despojados y desplazados están orientadas a garantizar “la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados,” y de manera subsidiaria, cuando no sea posible la restitución, a “determinar y reconocer la compensación correspondiente.” La restitución jurídica implica el “restablecimiento de los derechos de propiedad” y el “registro de la medida en el respectivo folio de

---

4 C-715 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SVP: María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV y AV: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).

matrícula inmobiliaria,” en el caso de los propietarios del inmueble despojado y de la declaración de pertenencia, en el caso de posesión....”

En este sentido, la Corte en la providencia aludido planteó los principios que rigen el proceso de restitución de tierras, acorde con el art. 73 de la norma en comento, y dijo:

“ ... Los principios que orientan el proceso de restitución de tierras despojadas se encuentran consagrados en el artículo 73 de la Ley 1448 de 2011, y son (i) el reconocimiento de la restitución jurídica y material como medida preferente de reparación integral; (ii) el derecho a la restitución opera independientemente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas; (iii) las medidas previstas buscan alcanzar de manera progresiva por el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas; (iv) las víctimas tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad; (v) las medidas de previstas en la ley buscan garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución; (vi) las medidas adoptadas deben adoptarse en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas; (vii) se debe garantizar la participación plena de las víctimas; y (viii) se garantiza la prevalencia del derecho a la restitución de las tierras despojadas o abandonadas de manera forzada a las víctimas que tengan un vínculo especial constitucionalmente protegido y a quienes sean los más vulnerables.

En el proceso de restitución de tierras es determinante establecer los hechos que motivaron el despojo o abandono, y la calidad de los titulares del derecho de restitución, la sentencia en comento al respecto indicó:

“Dentro del proceso de restitución se debe determinar **la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al despojo o abandono de las tierras**. Según el artículo 74 se define el despojo de tierras como “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia;” y por abandono forzado de tierras “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento,” durante el período comprendido entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley. ... ”

“ ...En ese proceso también se debe determinar **la calidad de los titulares del derecho a la restitución**, y que según el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, son “las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzosamente, en los términos establecidos en este capítulo.”



Refirió igualmente a las víctimas y expresó:

" ...En relación con **la condición de víctimas**, vale la pena recordar que la calidad de víctima es una situación de hecho que surge de una circunstancia objetiva, por la existencia de un daño ocurrido como consecuencia de los hechos previstos en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2012, tal como ha sido interpretado por la Corte Constitucional en las sentencias C-253 A de 2012, C-715 de 2012 y C-781 de 2012, independientemente de que la víctima haya declarado y se encuentre inscrita en el Registro Único de Víctimas. ..."

### **CASO CONCRETO**

Con el objeto de determinar si la accionante y su núcleo familiar cumplen con los lineamientos de la ley 1448 de 2011, en cuanto a los parámetros que la ley en cita establece a fin de ordenar la restitución que deprecian los accionantes, el Despacho estudiará los puntos que a continuación se relaciona: **1.** Los solicitantes están legitimados para impetrar la restitución y por tanto hay lugar a reconocerles como víctimas y acceder a las pretensiones incoadas con la solicitud. **2.** Identificación plena del predio **3.** Determinar si están dadas las condiciones para la restitución y el retorno y cómo operará la materialización de la restitución de tierras en el caso a estudio.

#### **1. LEGITIMACIÓN.**

Se encuentran legitimados en la causa por activa, acorde con la normatividad vigente, aquellas personas que se reputan como propietarias poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de éstas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa o indirecta de los hechos que configuren las violaciones de trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, entre el 1 de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley en comento.

Para el caso concreto, la solicitante se encuentran legitimada en la causa por activa, acorde con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, en virtud de que la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, ostenta la calidad de propietaria del inmueble objeto de restitución, al igual que su difunto esposo en su condición de titulares del derecho de dominio, lo que tiene sustento en el acto de compraventa realizada por la accionante y su esposo al señor JOSE MARIA GRIJALBA ERAZO, protocolizada mediante Escritura Pública No 1877 del 10 de diciembre de 1992 e inscrita el 20 de enero de 1993, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Santander de Quilichao, respecto del inmueble ubicado en la vereda el LLANITO, Corregimiento de Mondomo, Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, identificado con Matrícula Inmobiliaria No 132-23783 y cédula catastral 1969800040020177000.

Aclarado lo anterior, es preciso indicar, que acorde con el material probatorio con el que cuenta la presente acción constitucional, no hay duda de que la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ** y su núcleo familiar,

se vieron avocados a soportar la ola de violencia que vivía y vive aún el Municipio de Santander de Quilichao Cauca, lo que se constituyó en un hecho notorio en cuanto a los frecuentes ataques de las FARC en el sector, de los retenes ilegales en la vía panamericana, a las acciones de violencia perpetradas por el grupo armado ilegal de las AUC, Bloque Calima, que obligó al desarraigo por parte de la solicitante y su grupo familiar de su predio, donde tenían un negocio ( billar) que les generaba los recursos para atender sus necesidades y de las cuales generaban las condiciones para su estabilización económica y social.

Necesario es aclarar que el difunto esposo de la solicitante se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del sector y ello posiblemente conllevó a que el 19 de enero del año 2001 estando en su casa de habitación junto con el profesor ARTURO ALARCON MUÑOZ, llegaron tres motocicletas con hombres armados pertenecientes a las Auto defensas, quienes rodearon el inmueble y abrieron fuego contra los asistentes, resultando muertos en el mismo lugar el señor HENRY SAMBONY SILVA , esposo de la solicitante y el educador mencionado, hechos que fueron presenciados por el hijo de la señora ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ, de nombre JIMMY quien fue obligado por parte del grupo violento y que acaba de perpetrar el hecho de sangre, con amenazas, este hecho violento, y que sin duda alguna guarda nexos causales con el conflicto armado, obligó a la familia hoy solicitante del amparo de restitución, a abandonar su inmueble el mismo día de los hechos, dirigiéndose a la ciudad de Cali hasta el año 2006, fecha en la que regresa a la casa de sus padres en el corregimiento de MONDOMO, mas no a su inmueble de la vereda el LLANITO.

Es preciso indicar, que el Municipio de Santander de Quilichao ha sufrido un proceso de transformación económica y social de manera acelerada en las últimas décadas, lo que se debe entre otros aspectos a la construcción de la troncal Panamericana, la tenencia de tierra ha sido el factor determinante en las relaciones de poder social, político y económico en el departamento, y la producción derivada de la caña de azúcar se ha reconvertido hacia la producción de los llamados biocombustibles, factores determinantes en la situación de violencia que atraviesa el municipio de Santander de Quilichao. De ello da cuenta el análisis de contexto para las solicitudes de restitución del Municipio de Santander de Quilichao, adjunto a la demanda, y realizado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - Territorial Cauca (UAEGRTD). El crecimiento económico de una zona trae diversos beneficios, pero a su vez encierra niveles de conflictividad, lo que se evidencia en las lidias por la tierra, máxime cuando se trata de producción de caña de azúcar y es lo que ocurre con el municipio en comento.

Ahora bien, la violencia asociada al conflicto armado (guerrillas y paramilitares) como a la criminalidad común y organizada es uno de los flagelos que tiene azotado este sector del departamento del Cauca, hechos que han sido ampliamente conocidos a nivel Local, Nacional e Internacional.

En este orden de ideas, es necesario indicar que se evidenció la presencia de las FARC, entre los años 1984 y 1991, del Movimiento Armado Quintín Lame—MAQLII en 1991, la masacre de El Nilo en el año 1990, y el narcotráfico también azota el Municipio. De otra parte la



ley de 1995 - Ley Páez, que trajo consigo incentivos de índole tributario, lo que generó crecimiento económico por el establecimiento de empresas en el sector para acceder a los beneficios en comento, y el creciente desarrollo económico, han generado violencia, teniendo en cuenta la estratégica posición del municipio de Santander convirtiéndose un corredor necesario hacia la cordillera (CORINTO, MIRANDA, TORIBIO, SUAREZ, BUENOS AIRES), con amplia y reconocida presencia de cultivos ilícitos y obvio de grupos al margen de la ley que se lucran con ellos.

Así mismo, encontramos entre los años 1996 — 2000 Las FARC como guerrilla visible en la zona, con ataques constantes a la población del municipio de Santander de Quilichao, retenes ilegales sobre la vía Panamericana, combates con el Ejército.

En el municipio de Santander de Quilichao Cauca, en especial en sus corregimientos, también encontramos delincuencia organizada como otro factor determinante de violencia, en el año 1999 los paramilitares del Bloque Calima, Autodefensas Unidas de Colombia, operó en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Huila desde 1999 hasta 2004, año en que se desmovilizó como resultado del proceso de paz con el Gobierno de Colombia, en el año 2000, el Bloque Calima incursionó a Santander de Quilichao, y en el 2001 La vereda Lomitas se vio inmersa en la masacre de El Naya, el corregimiento de Mondomo y las veredas vivenciaron frecuentes tomas por parte de la guerrilla que generaron desplazamiento de población y abandono de predios.

En este sentido, no hay duda de las graves vulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y es aquí donde encontramos a la solicitante **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ** y su núcleo familiar, quienes claramente en sus intervenciones en la etapa administrativa, como en la etapa judicial, expresan su decisión rotunda de abandonar el predio donde residían, debido a la muerte violenta del esposo y padre, lugar donde no solo residían sino que tenían un negocio que ayudaba a sopesar sus necesidades básicas, el hecho violento que vivenció este núcleo familiar y que sin duda alguna guarda conexidad con el conflicto armado interno que vive el país, no solo generó el desarraigo de su bien sino también afectaciones de índole psicológico y moral que le genera recordar tan grave hecho.

Así las cosas, la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ** y su núcleo familiar, por ser arraigados de esa región y allí haber desarrollado su plan vida, este fue irrumpido por la violencia que azota el sector, a través de los grupos ilegales, que generaron la muerte violenta de su esposo y además por los ataques terroristas y combates entre fuerza pública y grupos al margen de la ley, por lo que se reitera, no cabe duda que la accionante y núcleo familiar se encuentran legitimados para accionar en restitución de tierras, por ser víctimas acorde con lo preceptuado por el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, así como lo normado en el art. 75 ejusdem, y los hace acreedores a los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Es necesario aludir, que en los interrogatorios que el Despacho efectúa a la solicitante y sus hijos, se evidenció la trágica situación que vivieron, quienes presenciaron la violencia, y el deceso de su esposo y padre, en la misma

vivienda que compartían y que hoy solicitan en restitución, situación por la cual decidieron abandonar el lugar.

Necesario es resaltar, que el predio que fue abandonado por mucho tiempo, solo hace poco la solicitante accedió para que el señor JUAN CARLOS ESPINOSA ALARCON este en él, hecho que se limita únicamente a habitar la vivienda en cuanto a lo que le es posible, debido a las condiciones de deterioro en las que se encuentra ésta.

No hay duda, basado en lo expresado, sobre la convergencia de los requerimientos para ser titular de la acción de restitución de tierras de la solicitante y sus hijos, y esto genera, igualmente, que dicho núcleo familiar es **VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO**, incluso por ello ya está incluida ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como víctima de desplazamiento forzado.

**2. IDENTIFICACIÓN PLENA DEL PREDIO**

El análisis efectuado por el despacho en esta providencia, lo centra en el inmueble que está ubicado en el corregimiento de Mondomo, en la vereda el Llanito, la cual está a dos kilómetros del corregimiento sobre la vía panamericana, identificado con Matrícula Inmobiliaria Nro. 132-23783 y cédula catastral 19698000400000002017000000000

Los **LINDEROS** del bien inmueble objeto de restitución, redactados de forma técnica son:

**NORTE:** MARTÍNEZ GÓMEZ FRANCISCO JAVIER CON EL PREDIO 00-04-0002-0342-000  
**ORIENTE:** CARRETERA ANTIGUA PANAMERICANA  
**SUR:** ROSERO DE GUERRERO EDILMA 00-04-0002-0188-000  
**OCCIDENTE:** MEDINA RIVERA EDITH 00-04-0002-0317-000

Cabida superficial de 194 metros cuadrados.

Acorde con la Georreferenciación, el predio se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas planas (Magna Colombia Bogotá), puntos extremos del área sin afectación ambiental:

PUNTO	COORDENADAS PLANAS		COORDENADAS	
	NORTE	ESTE	LATITUD (° ' ")	LONG (° ' ")
1	813035,0007	725249,640	2° 54' 9,741" N	76° 32'
2	813042,923	725267,768	2° 54' 10,000"	76° 32'
3	813032,674	725272,721	2° 54' 9,667" N	76° 32'
4	813027,389	725254,727	2° 54' 9,494" N	76° 32'

La información consignada en este acápite, es considerada por el Juzgado, como prueba documental fidedigna, acorde con lo normado en el inciso final del artículo 89 de la Ley 1448 de 2011, la cual fue allegada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - Territorial Cauca (UAEGRTD), y permite determinar con claridad el bien inmueble objeto de restitución, sin lugar a dudas.

Necesario es precisar, que desde el inicio de la solicitud y como posible afectación del bien a restituir, se menciona la existencia de fallas por tendencia a deslizamientos, ordenándose desde la admisión de la solicitud, a la Unidad de tierras, que acopie prueba para confirmar si tal afectación hace imposible la restitución, sin que se cumpliera por la Unidad tal pedimento, pero de la visita al bien a restituir en inspección judicial, se confirmó que hace parte de una Vereda El Llanito donde existen varias casas todas con residentes, sin que se evidencie la imposibilidad de que las mismas puedan ser habitadas, y de confirmarse la existencia de una falla que genere riesgos, sería obviamente para toda la vereda y todos sus habitantes, lo que por el momento resulta imposible de concluir y por ello acorde a lo observado en la inspección judicial, se colige que la afectación mencionada no menoscaba el bien, para que haga imposible su restitución y se ordene la compensación como subsidiariamente lo solicita la Unidad de Restitución de Tierras.

### **3. CONDICIONES PARA LA RESTITUCIÓN Y EL RETORNO - CÓMO OPERARÁ LA MATERIALIZACIÓN DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL CASO A ESTUDIO.**

Analizados los instrumentos internacionales reconocidos por Colombia, y que fueron génesis de la ley 1448 de 2011, ley que siguió su filosofía, podemos concluir que el objetivo principal para lograr la reparación y restablecimiento de derechos de las víctimas conceptuadas en el artículo 3 de la ley en cita, es la garantía de la restitución jurídica y material de los bienes inmuebles que hayan sido despojados o abandonados, por culpa del conflicto armado, esto es, la obligación Estatal y judicial, para con las víctimas legitimadas para accionar en restitución de tierras, es restablecer los derechos que ellas tenían para con los bienes inmuebles, y esta obligación, que hace parte del espíritu de la ley 1448 del 2011, trasluce independiente del retorno de las víctimas a los bienes restituidos.

Conclusión precedente que tiene fundamentos en uno de los principios que rigen la restitución de tierras y reglado en el numeral 2 del artículo 73 de la ley 1448 de 2011, **INDEPENDENCIA:** *"el derecho a la restitución de las tierras es un derecho en sí mismo y **es independiente de que se haga o no el efectivo retorno** de las víctimas a quienes les asista ese derecho", además de ser una "medida preferente de reparación integral para las víctimas".*

Teniendo la certeza de la conclusión precedente, esto es, que la obligación fundamental del Estado y del Despacho es la Restitución como medio ideal de reparación de las víctimas del desplazamiento y despojo de bienes inmuebles, debemos analizar la posición esgrimida por la UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS, como PRETENSION SUBSIDIARIA a la principal, esto es la COMPENSACION POR EQUIVALENTE, y a la vez requerida por la PROCURADORA JUDICIAL en los alegatos de conclusión, no solo por ser parte de las pretensiones, sino también, porque en el transcurso del trámite procesal de la solicitud se ventiló, por parte de los solicitantes y su núcleo familiar la imposibilidad de retornar al predio por las afectaciones psicológicas que la muerte de su esposo y padre, en el mismo predio, han generado.

**Primero**, analicemos la solicitud como pretensión subsidiaria, dejando claro por parte del Despacho la siguiente posición, en el pedimento subsidiario de la equivalencia en la restitución o la compensación económica no ha de emplearse la figura de la acumulación de pretensiones de que trata el Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, y de ahí que aquellas alternativas residuales de reparación no puedan ser planteadas en conjunto con la pretensión principal dentro de la misma demanda, como quiera que la subsidiaridad en las peticiones del procedimiento ordinario no comparten los presupuestos jurídicos de aquella que es permitida en el proceso de restitución, por manera que habrá de suministrar un tratamiento jurídico diferente a esas dos figuras adjetivas que únicamente son análogas en denominación.

Recordemos que la acumulación de pretensiones, genera la identidad probatoria en la fundamentación o soporte de las principales y de subsidiarias, de manera que los mismos elementos de juicio o probatorios que sirven de convicción para la prosperidad de las pretensiones principales, deben de servir, ser útiles, y pertinentes para la procedencia de las pretensiones subsidiaria, en caso de que las primeras no tengan reconocimiento en la sentencia.

Esta regla general y probatoria, frente a la acumulación de pretensiones indiscutiblemente no es aplicable en los procesos de restitución de tierras, y resulta totalmente discordante plantear pretensiones principales y subsidiarias, tan contradictorias probatoriamente hablando, esto es, resulta probatoriamente inaceptable pedir como principal la RESTITUCION y como subsidiaria la COMPENSACION, ya que ambas pretensiones, obviamente, no pueden compartir equivalencia en los medios de prueba, por cuanto la prosperidad de cada una de ella depende de la ocurrencia o demostración de situaciones fácticas diferentes, la misma regulación normativa de la ley 1448 de 2011, nos convence que en el evento de no prosperar la restitución propiamente, se debe a la demostración de las causales o de los hechos reglados para configurar la compensación por equivalencia o para permitir la compensación en dinero, y viceversa, puesto que la aplicación de cada una de ellas orbita en situaciones contrapuestas, y se necesitan pruebas con demostraciones fácticas diferentes para acceder a una u a otra .

De ahí que sin duda puede el Despacho sostener, que la subsidiaridad realmente no opera frente a la procedencia de uno y otro derecho, sino, por la fuerza y demostración de circunstancias de hecho que obligan a la escogencia de esa subsidiariedad para beneficiar a la víctima de mejor forma y no hay duda que esas circunstancias fácticas deben ser depurados, aclaradas y decididas en la fase administrativa del procedimiento de restitución de tierras, para presentar como pretensión principal, aquella que es residual por mandato de la norma y que este demostrada y con tendencia a prosperar.

Esta posición es la que asume el Despacho, dejando claro que la relación de pretensiones principales y subsidiarias dentro de la misma solicitud de restitución de tierras, resulta contradictoria, pues así planteadas se genera una dualidad probatoria, de demostración de dos situaciones fácticas diferentes, para restituir la convicción de la seguridad y para compensar la imposibilidad de restituir, ello conlleva a que la acumulación de pretensiones no sea viable legalmente para los procesos de restitución de tierras.

Así mismo, ya analizando legalmente las compensaciones por equivalente, recordemos que a ellas solo se puede acudir en forma excepcional de conformidad con el artículo 97 de la Ley 1448, y esta compensación solo opera o procede cuando **la restitución sea imposible**, y es el mismo artículo mencionado, en antelación, que regula las causales que dan aval a la figura excepcional de la compensación, y en dicha normatividad no está regulada como causal la obligación del retorno de la víctima.

Del análisis normativo de la ley 1448 del 2011, podemos concluir que existe una norma que establece un nexo entre el retorno y la restitución y es el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011, al introducir la figura de compensación, mencionada en principio como una "*alternativas de restitución por equivalente*", establece que en los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado **no pueda** retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se le ofrecerá ésta como alternativa, pero como podemos observar pese al nexo mencionado, se mantiene la exigencia de la imposibilidad real del retorno, circunstancia que está expresamente prevista posteriormente como una de las causales que hacen procedente la compensación, contemplada en el literal c) del artículo 97, y que son las que deben regir para decidir frente a la restitución.

Ya adentrándonos al proceso Constitucional de restitución que genera esta sentencia, confirmamos que probatoriamente se ha demostrado que evidentemente el predio solicitado en restitución fue abandonado, que la solicitante, y su difunto esposo tiene para con el predio registrado el derecho real de propiedad, que la solicitante y su núcleo familiar son víctimas del conflicto armado, que la solicitante y su núcleo familiar están legitimados para accionar en restitución de tierras, por cuanto debieron abandonar su predio producto de graves afectaciones al derecho internacional humanitario y al derecho de los derechos humanos, e igualmente que no se ha demostrado probatoriamente, que exista una causal de las contenidas en el artículo 97 de la ley 1448 del 2011, que genera la imposibilidad de restitución y formalización de tierras, y por ende la obligación de compensar por equivalente.

Se alegan dos circunstancias para las sendas peticiones de compensación, **Primera:** las presuntas fallas geológicas de deslizamiento en el predio, situación no demostrada en el proceso y menos aun cuando el bien hace parte de una vereda con varias casas habitadas, que hace difícil, por ahora, confirmar que sea imposible la restitución, y **Segunda:** las afectaciones psicológicas que sufrió y sufre el núcleo familiar solicitante por cuanto su esposo y padre fue muerto violentamente en el lugar a restituir, esto obviamente no puede desconocerlo el despacho, pero tiene otros mecanismos que pueden generar la superación de esta afectación psicológica, cual es, los tratamientos psicosociales del Ministerio de Salud, el acompañamiento permanente de la solicitante y sus hijos de sicólogos y especialistas en la materia para sobrellevar esta indudable afectación, pero ello, por si solo no nos genera el convencimiento de acudir a la excepcionalísima posibilidad de la compensación por equivalente o monetaria, aunado a ello y sin ser lo más relevante pero coadyuva a la orden de restitución que se va a impartir, es el hecho conocido de que la solicitante retornó al corregimiento de Mondomo, de donde pertenece la vereda el Llanito y que no queda tan distante de dicho lugar .



Para el Despacho la restitución jurídica y material es viable en favor de la solicitante y su núcleo familiar, y ello se ordenara así, aunado obviamente a las obligaciones de los diferentes entes estatales para garantizar una vida digna, un acompañamiento psicosocial, con mejora de vivienda, con proyectos económicos, con estabilidad y garantía de seguridad y las demás intervenciones de los entes estatales para garantizar a la solicitante y su núcleo familiar los derechos de verdad, justicia, reparación, y garantía de no repetición.

Cimentando aún más la decisión o el criterio que desde ahora asume el Despacho de que la medida de restitución no implica necesariamente el retorno, preciso es recordar lo acotado por la Corte Constitucional en Sentencia C 715 de 2012, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva, en la que señaló: *"Este derecho de restitución a los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la justicia retributiva. En este sentido, se le pueden atribuir algunas características: (i) ser un mecanismo de reparación y (ii) **un derecho en sí mismo, autónomo, con independencia de que se efectuó el retorno, o la reubicación de la víctima**".* (Negrilla fuera de texto).

Finalizando, expresemos que el hecho de que las víctimas no deseen regresar, no puede entenderse como un factor que haga imposible la restitución, primero por no estar expresamente reglado como causal para acceder a los mecanismo subsidiarios de compensación por equivalencia, sino también porque la voluntariedad reconocida claramente por el Principio Pinheiro No. 10 recae sobre el retorno y no sobre la restitución, al respecto, el Manual Sobre la Restitución de Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y Personas Desplazadas literalmente consignó lo siguiente:

*«Como se verá más adelante, los Principios establecen que el derecho a la restitución de la vivienda o el patrimonio no puede verse afectado por la decisión de sus titulares legítimos de no regresar. Por tanto, al contrario de lo que ocurre con el retorno en sí, la elección voluntaria de reasentarse o integrarse localmente, no afecta a la restitución. De hecho, la restitución puede ser muy importante para los que deciden regresar. Por ejemplo, la venta voluntaria, el intercambio o el arrendamiento de los bienes restituidos pueden constituir una fuente de ingresos importante para ayudar a que la integración local o el reasentamiento sean sostenibles.»*

Lo anteriormente expuesto, permiten concluir que, en efecto, **la restitución** jurídica y material del predio es la medida procedente a favor de la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ** y su núcleo familiar.

Basado en lo decidido, se librarán las órdenes a la Alcaldía del municipio de SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, para que se de aplicación al artículo 121 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, para la condonación de lo adeudado por impuesto predial y la exoneración del mismo, por espacio de dos años contados a partir de la ejecutoria de este fallo, al igual que otros impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal, que tenga el bien objeto de restitución.

En consecuencia se ordenará la Inscripción de la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, la cancelación de todo antecedente registral, gravamen y limitaciones de dominio, título de tenencia, arrendamiento, falsas tradiciones y medidas cautelares registradas con



posterioridad al abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales; Anotar la medida de protección de que trata el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011.

En lo atinente a los servicios públicos domiciliarios, como quiera que no se demostró que existieran obligaciones pendientes por ese concepto, no se accederá a las súplicas por tales rubros, lo cual no es óbice para que, en el evento de llegarse a demostrar los mismos, en razón del seguimiento que se hará a éste fallo, se impartan las órdenes a que haya lugar.

En relación con alivio de otros pasivos, como no se probó en este proceso que a cargo del solicitante exista cartera pendiente con entidades financieras o cualquier otro tipo de obligaciones relacionadas con el predio y el abandono forzado, no se dispondrá nada al respecto.

### **RESTITUCION JURIDICA DEL BIEN:**

Todo lo anterior da cuenta de la restitución material del bien, y necesario es realizar un análisis y adoptar conclusiones frente a la restitución jurídica del predio, atendiendo a que el mismo figuran como propietarios la solicitante y su difunto esposo, por ello la UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS entre sus pretensiones solicita ordenar el trámite judicial ante el Juez Ordinario correspondiente para la legalización jurídica del bien en favor de la solicitante y sus hijos, esto sin perjuicio de los derechos de los herederos determinados e indeterminados que no acudieron a la etapa administrativa.

Sea lo primero expresar, que no existe en todo el haz procesal prueba alguna con la cual podamos aseverar que la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, haya legalizado, en vida del señor HENRY SAMBONY SILVA, su relación de hecho (compañeros permanentes) o posterior a su deceso, dentro del término legal establecido para ello, haya legalizado dicha relación, por ende, imposible es ordenar ante el juez competente que se realice una liquidación de la sociedad conyugal dentro del proceso sucesoral, las ordenes estarán limitadas al trámite de la sucesión intestada, pero obviamente respetando el derecho de la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, al 50% del predio como copropietaria del mismo, ese 50% se ordenara restituir en su favor, el restante y que pertenecía al difunto **HENRY SAMBONY SILVA** se ordenará restituir a la masa sucesoral del causante, para el trámite de sucesión a favor de los herederos determinados e indeterminados de llegar a presentarse en el proceso pertinente.

Teniendo en cuenta la calidad de víctima de la solicitante y de sus hijos y respetando estas condiciones especiales, este despacho judicial dispondrá la obligación que le asiste al Juzgado Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, Cauca (Circuito al cual pertenece el corregimiento de Mondomo), de tramitar el proceso de sucesión intestada del causante HENRY SAMBONY SILVA, **de forma prioritaria**, y sin que ello genere gasto procesal alguno para los herederos determinados y acreditados en este proceso, debiendo -inclusive- designarles un apoderado judicial que los represente en el trámite del proceso, una vez sea voluntad de los interesados acercarse a aquel despacho judicial con el fin de iniciar este trámite procesal. En todo caso, las erogaciones que se causen por concepto de publicaciones y notificaciones a que haya lugar (gastos que necesariamente alguien debe

cubrir), serán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Así mismo, al tratarse de una mujer rural, en aplicación de la Ley 731 de 2002, tendrá prioridad en materia de crédito, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación, subsidio familiar; tal como lo tiene establecido el artículo 117 de la Ley 1448 de 2011, por tanto, en el momento en que la Sra. **ALBA NIDIA MOSQUERA**, requiera acceder a estos beneficios, así lo expresará al despacho, el cual, en ejercicio del mantenimiento de la competencia post fallo (art. 102 Idem), ordenará las medidas a que haya lugar.

En este orden de cosas, quedará garantizada la restitución jurídica y formalización del predio deprecado en restitución.

Es importante resaltar, que la ley de restitución de tierras propende por una **restitución integral**, en este sentido se emitirán además las siguientes órdenes:

1. **CONCEDER** a favor de la señora ALBA NIDIA MOSQUERA el subsidio de vivienda rural, administrado por el Banco Agrario, el cual se aplicará única y exclusivamente sobre el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 1 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao, Cauca, cédula catastral No. 132-23783 y cédula catastral 1969800040020177000, y se debe destinar exclusivamente para la remodelación y adecuación del mismo. Lo anterior de conformidad con el artículo 126 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 45 del Decreto 4829 de 2011. Por Secretaría se ordenará librar oficio al Banco Agrario, sede principal.
2. Se ordenará oficiar al **Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–** y a la **Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas**, para que vinculen a los aquí reconocidos como víctimas a programas de formación y capacitación técnica y a los proyectos especiales para la generación de empleo rural que tengan implementados y que les sirvan de ayuda para su auto sostenimiento.
3. Se ordenará oficiar al **Centro de Memoria Histórica**, informándole de lo aquí decidido para que en el marco de sus funciones documente la información de los hechos ocurridos en el municipio de Santander de Quilichao.
4. **ORDENAR** a la Alcaldía del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, incluir, con prioridad, en el orden que corresponda y con enfoque diferencial, atendiendo a la calidad de mujer víctima del desplazamiento forzado, dentro de los programas de atención, prevención y protección dirigidos a la población en situación de desplazamiento, a la Señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**.
5. **PRIORIZAR** a la Sra. **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, en programas de crédito, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación, subsidio familiar, conforme a la Ley 731 de 2002, por tanto, en el momento en que la Sra. MOSQUERA GOMEZ requiera acceder a estos beneficios, así lo

expresará al despacho, el cual ordenará las medidas a que haya lugar basado en la competencia post fallo contenida en el artículo 102 de la ley 1448 de 2011.

- 6. **Ordenar** a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS Y AL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para que en forma articulada formulen y llevan a cabo un plan de acompañamiento al retorno de la solicitante y su núcleo familiar, a través de generación de oportunidades y alternativas de retorno al inmueble.
- 7. Ordenar al Ministerio de salud, a través del sistema de seguridad social que ingrese a la solicitante y a su núcleo familiar a todos los servicios de asistencia médica integral, quirúrgica, odontológica psicológica hospitalaria y de rehabilitación, aplicando el enfoque diferencial por tratarse de víctimas del conflicto armado interno.
- 8. ORDENAR al Ministerio de salud, de forma preferente, el apoyo y acompañamiento PSICOSOCIAL a la solicitante y su núcleo familiar, acorde a las afectaciones que la muerte violenta de su esposo y padre les generó.
- 9. Se ordenará oficiar a las autoridades militares y policiales pertinentes y competentes, para que en cumplimiento de su función constitucional y misión institucional presten seguridad y apoyo al solicitante para garantizar lo dispuesto en este fallo.

De esta forma se acceden a la pretensión principal planteada en la solicitud de restitución y formalización de tierras, por ser esta la demostrada al interior del proceso.

**DECISIÓN**

En razón y mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** PROTEGER el DERECHO FUNDAMENTAL A LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS, de la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, identificada con la cedula No 34.537.991 y su grupo familiar:

SOLICITANTE	IDENTIFICACION	NUCLEO FAMILIAR	PARENTESCO
ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ	CC No. 34.537.991	JYMMY SAMBONI CC No. 10.498.142	HIJO
		AURA MARIA SAMBONI MOSQUERA CC. No. 1.062.300.178	HIJA

Respecto del predio ubicado en la Vereda El Llanito, Corregimiento de Mondomo, Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, identificado con Matrícula Inmobiliaria No132-23783 y cédula catastral 1969800040020177000.

**SEGUNDO: RESTITUIR** el 50% del inmueble ubicado en la Vereda El Llanito, Corregimiento de Mondomo, Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, identificado con Matrícula Inmobiliaria No132-23783 y cédula catastral 1969800040020177000, solicitado a la señora ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ, como copropietaria del mismo y el otro 50% del predio, se ordena **RESTITUIR** a favor de la masa herencial del señor **HENRY SAMBONY SILVA**.

**TERCERO:** ORDENAR al Juzgado Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, Cauca; adelantar el proceso de sucesión intestada del causante HENRY SAMBONY SILVA, de manera preferencial y sin que ello genere gastos o costas procesales para los herederos determinados y acreditados en este proceso: siendo obligación designarles un apoderado judicial que los represente en el trámite del proceso. Ello previa solicitud de los interesados.

En todo caso, las erogaciones que se causen por concepto de publicaciones y notificaciones a que haya lugar, serán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

**CUARTO: ORDENAR** a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao:

**1.-** Inscriba esta sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria No 132-23783, relacionada con el predio ubicado en la vereda El Llanito. Inscripción de restitución material del 50% a favor de la solicitante **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ;**

**2.-** Cancele todo antecedente registral, gravamen y limitaciones de dominio, títulos de tenencia, arrendamiento, falsas tradiciones y medidas cautelares registradas con posterioridad al abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales, incluidas las medidas que administrativa y judicialmente se tomaron en relación de este inmueble;

**3.-** Anotar la medida de protección de que trata el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011. La **Oficina de Registro aludida remitirá a este Despacho, a la mayor brevedad posible, el certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria No 132-18785, con todas las anotaciones que ordenó la presente providencia.**

**QUINTO: ORDENAR** a la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, se dé aplicación al artículo 121 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, para la condonación de la deuda que por impuesto predial tiene el predio ubicado en la Vereda El Llanito, Corregimiento de Mondomo, Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, identificado con Matrícula Inmobiliaria No132-23783 y cédula catastral 1969800040020177000 y la exoneración del impuesto predial y demás rentas municipales por lapso de dos años contados a partir de la fecha de esta sentencia.

**SEXTO:** NO SE ORDENA el alivio de pasivos por concepto de servicios públicos ni obligaciones crediticias con entidades del sector financiero, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia.

**SEPTIMO:** Para garantizar la restitución integral, el despacho ordena:

- a) **CONCEDER** a favor de la señora **ALBA NIDIA MOSQUERA** el subsidio de vivienda rural, administrado por el Banco Agrario, el cual se aplicará única y exclusivamente sobre el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 1 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao, Cauca, cédula catastral No. 132-23783 y cédula catastral 1969800040020177000, y se debe destinar exclusivamente para la remodelación y adecuación del mismo. Lo anterior de conformidad con el artículo 126 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 45 del Decreto 4829 de 2011. Por Secretaría líbrese oficio al Banco Agrario, sede principal.
- b) **SE ORDENA** al **Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–** y a la **Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas**, para que se vincule a los aquí reconocidos como víctimas, a programas de formación y capacitación técnica y a los proyectos especiales para la generación de empleo rural que tengan implementados y que les sirvan de ayuda para su auto sostenimiento. LIBRESE OFICIO.
- c) **Se ORDENA OFICIAR** al **Centro de Memoria Histórica**, informándole de lo aquí decidido para que en el marco de sus funciones documente la información de los hechos ocurridos en el municipio de Santander de Quilichao.
- d) **ORDENAR** a la **Alcaldía del Municipio de Santander** de Quilichao, Cauca, incluir, con prioridad, en el orden que corresponda y con enfoque diferencial, atendiendo a la calidad de mujer víctima del desplazamiento forzado, dentro de los programas de atención, prevención y protección dirigidos a la población en situación de desplazamiento, a la Señora **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**.
- e) **PRIORIZAR** a la Sra. **ALBA NIDIA MOSQUERA GOMEZ**, en programas de crédito, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación, subsidio familiar, conforme a la Ley 731 de 2002, por tanto, en el momento en que la Sra. MOSQUERA GOMEZ requiera acceder a estos beneficios, así lo expresará al despacho, el cual ordenará las medidas a que haya lugar basado en la competencia post fallo contenida en el artículo 102 de la ley 1448 de 2011.
- f) **Ordenar** a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS Y AL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL** del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para que en forma articulada formulen y llevan a cabo un plan de acompañamiento al retorno de la solicitante y su núcleo familiar, a través de generación de oportunidades y alternativas de retorno al inmueble.
- g) **Ordenar al Ministerio de salud**, a través del sistema de seguridad social que ingrese a la solicitante y a su núcleo familiar a todos los servicios de asistencia médica integral, quirúrgica, odontológica psicológica hospitalaria y de rehabilitación, aplicando el enfoque diferencial por tratarse de víctimas del conflicto armado interno.



- h) **ORDENAR al Ministerio de salud**, de forma preferente, el apoyo y acompañamiento PSICOSOCIAL a la solicitante y su núcleo familiar, acorde a las afectaciones que la muerte violenta de su esposo y padre les generó.
- i) **ORDENAR a las autoridades militares y policiales pertinentes** y competentes, para que en cumplimiento de su función constitucional y misión institucional presten seguridad y apoyo a la solicitante para garantizar lo dispuesto en este fallo.

**OCTAVO:** **NO SE ACCEDE** a las pretensiones que se han decidido en contravía de lo pedido ni las que brillan como inconsecuentes por la restitución por equivalencia.

**NOVENO:** Queden comprendidas en el punto noveno de esta parte resolutive, todas las demás órdenes que se hagan necesarias y ante las entidades competentes, para efectos de la restitución integral y que resulten consecuentes y necesarias en este particular caso.

**DÉCIMO:** Por Secretaría líbrense todos los oficios, comunicaciones y comisiones necesarias para materializar las órdenes aquí impartidas.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

El Juez,

  
**LUIS FELIPE JARAMILLO BETANCOURT**

*Consejo Superior  
de la Judicatura*